

LA REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE MUJER EN ROMA

Celia Pereira Porto

Universidad de La Coruña

SUMARIO: 1. *Introducción*. 2. *La situación social de la mujer en Roma*. 3. *La mujer desde una perspectiva política: «ciudadana romana»*. 4. *El entramado jurídico*. 4.1 Estatus jurídico de «materfamilias». 4.2 Matrimonio y filiación. 4.3 Muerte y sucesión. 4.4 Incapacidades: a) Prohibición de adoptar. b) Tutela. c) Otras incapacidades. 5. *Conclusiones*. 6. *Bibliografía*.

1. INTRODUCCIÓN



ANTES de proceder al análisis del tema objeto de la presente comunicación, queremos hacer notar la importancia que tendrán tres tipos de consideraciones:

1.^a La primordial *norma* de derecho romano que dividía y clasificaba a todos los ciudadanos en hombres y mujeres (*tertium non datur*). El ordenamiento jurídico romano quería que hubiera dos sexos y trató de ordenar la sociedad de acuerdo con este principio de división.

2.^a La mujer carecía de «*potestad*». Este hecho tuvo una influencia decisiva en el estatus femenino.

3.^a La *estrechez del ámbito de su «posible actuación jurídica»*, que se reducía a su propia persona, y que estará en la base del régimen de las incapacidades femeninas.

Abordaremos la exposición diferenciando analíticamente tres puntos de vista: social, político y jurídico. Naturalmente, esta diferenciación es sólo teórica y, nuestro objetivo, consistirá, precisamente, en extraer una serie de conclusiones del análisis diferenciado de estos tres puntos de vista y, también, de su mutua interacción.

2. LA SITUACIÓN SOCIAL DE LA MUJER EN ROMA

La *función primordial* que cumplía la mujer en la sociedad romana era la de *reproductora*. El principal valor femenino era el de traer ciudadanos romanos al mundo. Esta capacidad se convirtió, en muchas ocasiones, como analizaremos más adelante, en una gran aliada de la mujer que coadyuvaba a su «emancipación».

Desde este punto de vista fundamental de la consideración de la mujer como madre, hay que destacar la falta de prejuicios que caracterizó a este tipo de sociedad en cuanto a la procedencia matrimonial o no matrimonial de los hijos. En este sentido, se aprecia, que no existían recriminaciones sociales hacia las mujeres que tenían descendencia fuera del matrimonio, e incluso, que la absoluta presunción de paternidad del marido, hacía completa abstracción de la verdadera filiación de los hijos.

En el *terreno patrimonial* hay que decir, que las mujeres podían acumular una cierta riqueza que, en algunos casos, en clases acomodadas, podían ser grandes fortunas. Las mujeres podían heredar, podían ser beneficiarias de un testamento, tenían su dote, y estos hechos hacían que, a pesar del régimen de incapacidades a que estaban sometidas, tuviesen algunos bienes de cuya administración se ocupaban personalmente.

En relación con el *trabajo femenino*, las mujeres, además de realizar oficios que se consideraban específicamente propios de su sexo, llevaron a cabo, también, actividades artesanales y comerciales de variado tipo, con excepción del ejercicio de la banca y del cambio, del que estaban excluidas, en la medida en que estas actividades suponen operaciones por cuenta de otro.

También es de destacar el hecho de que estas mujeres manifestaron *preocupaciones de orden jurídico*, demostradas, en la época del Imperio, a través de los rescriptos que le fueron remitidos por pedido de ellas.

3. LA MUJER DESDE UNA PERSPECTIVA POLÍTICA: «CIUDADANA ROMANA»

Como hemos mencionado anteriormente, un gran valor de la mujer en Roma lo supone el hecho de ser transmisora de la ciudadanía romana a sus descendientes. Pero lo dicho hasta aquí debe de ser matizado en el sentido siguiente:

La ciudadanía se transmitía en Roma tanto por vía masculina como por vía femenina. Hasta aquí el régimen era homogéneo, pero no en lo que sigue. Por *vía masculina* el *matrimonio* era indispensable para la transmisión del derecho de ciudadanía. Mientras que, fuera del matrimonio, la ciudadanía se transmitía por mujeres solteras y concubinas.

Si los hijos nacían dentro de un matrimonio legítimo seguían el origen de su padre, es decir, la ciudad de la que el padre extraía su propio origen paterno. Y así, sucesivamente, sin ningún límite para esta regresión en el tiempo. Vemos, cómo este orden político establecía una *continuidad* en la sucesión de los ascendientes a los descendientes varones, de forma que la ciudadanía de los primeros se *prolongaba* en la de los segundos.

En el caso de los hijos que nacían fuera del matrimonio, seguían el origen de la madre. Al no tener un padre legal era de la madre de quien adquirían el origen, y así, el hijo tomaba la ciudadanía que ésta tuviera en el momento del *parto*. Se trata de su *origen primero* porque la ciudadanía no le viene al hijo más allá que de su madre. No hay aquí continuidad ni sucesión alguna, sino sólo un *comienzo absoluto*. Con razón decía Ulpiano que «*la mujer es el comienzo y el fin de su propia familia*».

4. EL ENTRAMADO JURÍDICO

4.1 ESTATUS JURÍDICO DE «MATERFAMILIAS»

Si volvemos ahora al análisis del concepto de mujer romana como madre, y aludimos al binomio madre-esposa, aun a pesar de haber expresado la falta de prejuicios que caracterizaba a la sociedad romana en materia de hijos fuera del matrimonio, es para poner de manifiesto cuál era el estatus jurídico de *materfamilias*; analizar en qué medida se relacionan con él los conceptos de madre y de esposa y contraponer este estatus al masculino de *paterfamilias*.



Cuando se habla del título de *materfamilias* o *madre de familia*, lo que se quiere significar con esa expresión no es el hecho de que una mujer tenga o haya tenido hijos, sino que es un concepto que depende enteramente del *matrimonio*.

En la época arcaica, cuando por el matrimonio *cum manu*, la mujer se ponía bajo la potestad de su marido, ser «madre» significaba ser esposa bajo potestad de un marido. Posteriormente, el término llega a expresar simplemente a la esposa de un ciudadano plenamente capaz, a la esposa sin más.

De esta forma, se observa que el que una mujer llegase a ser *materfamilias* no dependía del hecho del parto sino del matrimonio. Este estatus era una dignidad que le confería el matrimonio aun antes del nacimiento de los hijos.

Por su parte, el estatus masculino de *paterfamilias* presuponía la no existencia de ascendientes varones con potestad sobre él. Este estatus suponía la posibilidad real o potencial, dependiendo de si el hombre tenía o no descendientes, de ejercer sobre ellos un poder.

Por tanto, los estatus jurídicos de *materfamilias* y *paterfamilias* difieren en su contenido. Una mujer podía ostentar el título de *materfamilias* (ser esposa) y estar bajo potestad de un varón. En el caso del estatus masculino, sin embargo, los términos de *paterfamilias* y sometimiento a potestad de otro son enteramente incompatibles.

Ambas categorías suponen una ficción, en la medida en que se puede ser «padre» o «madre» sin tener descendencia. Pero, mientras que el estatus masculino implica potestad, el femenino carece de ella. Ser «madre» es ser esposa, ser «padre» es no estar sujeto a potestad y poder ejercerla sobre otros.

4.2 MATRIMONIO Y FILIACIÓN

La naturaleza del matrimonio romano es puramente consensual. El matrimonio se perfecciona, existe jurídicamente, por el mero consentimiento sin que sea necesaria su consumación. A pesar de ello, su finalidad es procreadora, y persigue dotar al marido de descendencia que le prolongue.

Se exigía la madurez sexual de los esposos y, explícitamente, que fuesen de diferente sexo. Por ello, aunque no se dé importancia jurídica a la consumación del matrimonio, la función de procreación está en su misma base.

Indiferencia jurídica hacia la consumación del matrimonio y estructura jurídica de la filiación guardan una relación muy estrecha. La determinación de la filiación paterna se basa en una ficción, en una presunción; de ahí que



no tenga importancia para el derecho que el matrimonio se haya consumado o no o, incluso, que el marido sea incapaz de consumarlo (eunuco, impotente). En cualquier caso, los hijos que nazcan de un matrimonio legítimo son del marido.

Se comprueba así la disimetría existente entre las relaciones de los padres con sus descendientes y las relaciones de las madres con sus hijos.

El vínculo que unía al padre con sus descendientes era una ficción, una abstracción, un *vínculo jurídico* que, como tal, podía romperse. Por esclavitud del padre o del hijo, por pérdida de la ciudadanía, por el paso del hijo a una dependencia jurídica distinta de la de su padre, por adopción, por emancipación, se disolvía la potestad paterna. El niño concebido en matrimonio tomaba el estatus de su padre en el momento del nacimiento. Pero, como la relación que unía a ambos estaba instituida por el derecho, acontecimientos posteriores en el estatus jurídico de uno u otro podían modificar un vínculo que no era «natural», sino jurídico.

Por el contrario, cuando la concepción se producía fuera del matrimonio, el hijo tomaba el estatus de su madre en el momento del parto. Pero esta relación de madre y descendencia no estaba determinada por el derecho, sino que era ajena a él. Era un *vínculo* totalmente *natural, de hecho*. La madre ni es legítima, ni es natural, sino que el acontecimiento de la maternidad está al margen del derecho. Por esta razón nunca se puede romper el vínculo que une a ambos por modificaciones posteriores de sus estatus jurídicos. Un vínculo que no es abstracto sino concreto, que no es ficticio sino real, que no es de derecho sino de hecho, no puede ya romperse. En el momento del parto la madre transmite a sus hijos su estatus, pero después tiene lugar una total independencia jurídica de sus estatus respectivos.

4.3 MUERTE Y SUCESIÓN

Hemos citado ya en varias ocasiones la carencia de potestad que padece la mujer, pero, tal vez, en ninguna institución jurídica tenga este hecho tanta fuerza como en la sucesión hereditaria. La razón de esta afirmación es la siguiente: tiene herederos «suyos» aquel que tiene descendientes bajo su potestad. En consecuencia, la mujer carece de herederos «suyos» y no tiene quien la suceda, de una forma directa, a su muerte.

El derecho sucesorio se asienta sobre la base del dicotómico sistema de parentesco (agnados/cognados) y no deja espacio al vínculo de filiación materna.

Siguiendo la Ley de las XII Tablas, 450 a. C., base de sustentación del sistema de *sucesiones intestadas*, la mujer no tenía herederos «suyos» llamados a prolongarla. El hombre, sí. Por eso se oponen frontalmente la *continuidad* de la sucesión intestada masculina a la *discontinuidad* de la posible sucesión testamentaria femenina.

A la muerte de un paterfamilias sus herederos le suceden inmediatamente. Los descendientes que había tenido bajo su potestad le continúan en tanto que herederos «suyos», de una forma continua, sucediéndole, dentro de esta categoría, los hombres y las mujeres con absoluta igualdad.

A finales de la época republicana, el *derecho sucesorio pretoriano* remedió muy parcialmente la evicción de la sucesión materna, a través de la introducción de la transmisión de la posesión en favor de los cognados. Pero éstos no heredaban sino en segundo término y por defecto de «sui» y agnados.

La mujer, que al carecer de potestad, no tenía herederos «suyos» que la continuasen de forma inmediata a su muerte, podía acudir a la institución del *testamento* que le permitía dar una realidad patrimonial al vínculo que la unía con sus descendientes. Sin embargo, este remedio era sólo parcial, en la medida en que no evitaba la *discontinuidad* propia de la sucesión femenina.

Es decir, las mujeres no estaban privadas de herederos, que podían darse a través de la institución testamentaria, sino de sucesores que las continuasen de pleno derecho y sin ruptura. Y esto se debía a su falta de potestad sobre sus descendientes.

Dentro de la *sucesión testamentaria* el régimen era idéntico para ambos sexos, salvo a la hora de la desheredación. El padre necesitaba una cláusula de desheredación expresa, de la que la madre podía prescindir. Pero esto no es más que otra consecuencia de la sucesión que de forma «natural» acompañaba al hombre y faltaba a la mujer.

En el siglo II se produjeron dos grandes reformas en materia de sucesión legítima o intestada.

Por un lado, el senadoconsulto Tertuliano otorgaba a las madres de tres hijos (cuatro si se trataba de una manumitida) un derecho sobre la herencia de sus hijos premorientes.

Por otra parte, el senadoconsulto Orfitiano (178) instauraba una sucesión legítima de madres a hijos. Pero aun así subsistía una diferencia: mientras que los herederos del padre eran llamados en la primera categoría de «*liberi*» (sus descendientes emancipados o no), los de la madre lo eran en la de los «*legitimi*» (reservada tradicionalmente a los colaterales paternos).

4.4 INCAPACIDADES

a) *Prohibición de adoptar*

Las mujeres romanas no podían adoptar. Después de todo lo que llevamos dicho este hecho no puede extrañar. Las mujeres están excluidas del derecho de adopción, pues, como dice Gayo, «ni siquiera tienen bajo su potestad a sus hijos naturales».

En contraposición, hay que hacer notar que tanto los impotentes como los eunucos tenían capacidad para adoptar, a pesar de su ineptitud física para engendrar. Los hombres podían adoptar tanto estando casados como no y, en el primer caso su esposa no participaba en un acto que no la convertía en madre del adoptado.

En el siglo VI, por autorización del emperador, una mujer tenía el derecho a considerar como hijo propio a un allegado elegido por ella como consuegro y en sustitución de su hijo muerto. Pero ésta era una medida muy excepcional que en nada modifica lo que hemos afirmado.

b) *Tutela*

Tutela de las mujeres

Las madres estaban privadas de la tutela de sus hijos menores. Eran los hombres quienes podían instituir heredero para sus hijos impúberes, y eran ellos los que ejercían el oficio de tutor.

Y ello es así, independientemente de que en la práctica las mujeres criasen a sus hijos y se ocupasen de su mantenimiento y educación (viudas, divorciadas), en la medida en que subsistía una doble administración: la de la madre, efectiva, y la del tutor, nominal, pero siendo al tutor a quien los hijos podían exigir responsabilidad.

La ley de Teodosio (390) aceptaba la tutela de las mujeres a condición de que juraran no volver a casarse.

Tutela para las mujeres

En los años 30 del siglo I subsistía la tutela para las mujeres emancipadas o manumisas, en favor de su emancipador o amo, salvaguardando los intereses sucesorios de éstos, a la vez tutores y herederos.



La antigua tutela de la Ley de las XII Tablas, que beneficiaba a los agnados más próximos a las mujeres libres, fue abolida por Augusto cuando, casadas o no, las mujeres habían traído al mundo tres hijos, o cuatro si se trataba de una manumisa.

Claudio suprimió la tutela agnática para las mujeres que habían nacido libres. Y así, sólo subsistió la autoridad del amo sobre las manumisas que no habían parido cuatro veces.

Pero esta supuesta emancipación de las mujeres hay que ponerla en relación con la *transformación del derecho matrimonial* que se produjo en las últimas décadas del siglo I a. C. El matrimonio *cum manu* va declinando hasta que desaparece y, con su desaparición, se produce un desplazamiento del centro de gravedad jurídico de la mujer, del marido y sus agnados, a su padre y los agnados de su padre.

De esta manera lo que parecía emancipación de la mujer se convierte en lo contrario. De la potestad del marido la mujer podía liberarse (viudedad, divorcio); pero ahora, la dependencia jurídica de su parentesco de origen la acompañará de por vida.

A pesar de lo dicho, las mujeres, en la práctica, se ocuparon de sus propios asuntos, y la tutela fue evolucionando también, de forma que llegó un momento en que era más nominal que real.

c) Otras incapacidades

Las mujeres en Roma padecían otra serie variada de incapacidades (representación, intercesión, postulación en nombre ajeno, acusación pública...), pero todas ellas tenían algo en común: y es que la mujer tenía *limitado su ámbito de «actuación jurídica» a su propia persona*, a sus propios intereses. Y, en ese sentido, cualquier actuación que sobrepasase ese estrecho marco era un oficio civil, viril y, por tanto, vedado al sexo femenino. La mujer carecía de capacidad para representar a otro y este hecho la hacía incapaz de realizar multitud de oficios que se consideraban, así, masculinos.

5. CONCLUSIONES

Podemos observar cómo el derecho romano construyó una ordenación jurídica de la división de los sexos muy compleja, que intentaba llegar, y, llegó de hecho, hasta los mínimos detalles a la hora de regular la sociedad.

Toda esta construcción jurídica se interrelacionaba y engarzaba de una forma perfecta: la carencia de potestad de las mujeres, el régimen del matrimo-

nio, la determinación de la filiación, la sucesión, la tutela..., formaban parte de un círculo vicioso que se iba autojustificando.

Por un lado, está la mujer, procreadora, poseedora de alguna riqueza, administrando sus propios asuntos... y, por otro lado, está la construcción del derecho: la tutela, las incapacidades, la sujeción y la carencia, como no, de potestad...

La ordenación político-jurídica que constriñe la vida social y política en Roma hace que, en el caso de la mujer, ésta quede relegada a su propia persona y al ámbito de lo «doméstico», de lo «privado».

A pesar de la diferenciación analítica entre sociedad, política e instituciones jurídicas, lo cierto es que el ordenamiento jurídico *determina* mediante sus normas el confinamiento de la mujer en su casa, al cuidado, en el mejor de los casos, única y exclusivamente, de su propia persona, sin poder hacerse cargo, ni siquiera, en derecho, de sus propios hijos menores.

Y decimos, en el mejor de los casos, porque lo habitual era el sometimiento de la mujer a otra potestad (la tutela jurídico-política), con lo cual la mujer ni siquiera era totalmente competente, según el ordenamiento, para llevar a cabo el cuidado de su propia persona y bienes y hacer explícita su presencia en la sociedad. A modo de conclusión puede afirmarse que el derecho romano privaba a la mujer de autonomía jurídico-política y la confinaba al ámbito del hogar, de lo «doméstico»; lugar, donde, de todas formas, ejercía un «poder» más privado que público.

6. BIBLIOGRAFÍA

- AA. VV., «Women and Power: Learning to use the law», en *Human rights*, vol. 20, n.º 4, 1993.
- CAMBRÓN INFANTE, A., «Muller e traballo doméstico», en *Festa da Palabra Silenciada*, n.º 6, outono 1989.
- CASTRESANA, A., *Catálogo de virtudes femeninas*, Madrid, Ed. Tecnos, 1993.
- CICCOTTI, E., *Donne e politica negli ultimi anni della Repubblica Romana*, Napoli, Jovene Editore, 1985.
- D'ORS, *Derecho Privado Romano*, Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, 1986.
- DUBY, G., y PERROT, M. (direc.), *Historia de las mujeres en occidente*, Barcelona, Ed. Círculo de Lectores, 1994, vol I.
- GARCÍA GARRIDO, M. J., *Derecho Privado Romano*, Madrid, Ed. Dykinson, 1989.
- RUBIO CASTRO, A., «El feminismo de la diferencia», en *Revista de Estudios Políticos*, n.º 70, 1990, pp. 185-207.